

Las fuerzas sociales impulsan la inseguridad financiera

Seeraj Mohamed

La frecuencia de las crisis financieras ha aumentado y nos preocupa cuándo nos asaltará la próxima. La liberalización de los flujos de capital de un país a otro ha aumentado la posibilidad no sólo de contagio de las crisis, sino de que la prodigalidad de un país se transmita fácilmente a otro. Los formuladores de políticas económicas tienen el deber de proteger a sus países del contagio, de la inestabilidad financiera mundial y de la adopción de prácticas financieras despilfarradoras, y pueden hacerlo reafirmando su soberanía política. El movimiento sindical internacional puede desempeñar un importante papel en la lucha por la adopción de políticas que limiten el poder de las finanzas.

La sociedad civil, incluidos los sindicatos, deberían promover políticas económicas que protejan a los países de las crisis económicas y del contagio. Los sindicatos internacionales están bien situados para coordinar las campañas de promoción en todos los países. La liberalización financiera generalizada lleva a una mayor inseguridad socioeconómica y a la pérdida de empleos, factores que debilitan el tejido social y acarrear mayores dificultades para los más desfavorecidos. Si la situación se les complica, los ricos pueden diversificar sus carteras de inversiones y trasladar su riqueza al extranjero. Pueden lidiar las tormentas de inestabilidad financiera y las crisis, mientras los pobres quedan atrapados en el ojo del huracán.

La liberalización financiera generalizada lleva a una mayor inseguridad socioeconómica y a la pérdida de empleos

Muchos países están considerando la posibilidad de introducir cambios a la reglamentación de las instituciones y los mercados financieros. Sin embargo, no deberíamos contar con que se lleven adelante grandes cambios. El *Wall Street Journal* del 25 de febrero de 1993 citaba a James Carville, comentarista político y estratega de la campaña electoral de 1992 del Presidente Clinton: «Solía pensar que si existía la reencarnación, me gustaría volver como presidente, papa o bateador de 400 de béisbol. Pero ahora quiero volver como mercado de valores. Así puedes intimidar a todo el mundo». El poder

económico y financiero de las instituciones financieras, incluidas muchas que son «demasiado grandes para fracasar», es enorme. Se cuenta con que las grandes corporaciones privadas y los gobiernos hagan sus políticas y prácticas más aceptables para los pocos cientos de personas que operan en los mercados financieros y las principales agencias calculadoras de solvencias crediticias. Lo que es más, los formuladores de políticas económicas y los dirigentes de los bancos centrales de muchos países proceden de grandes instituciones financieras y esperan trabajar para ellas en el futuro. Las instituciones financieras grandes y muy poderosas tienen la capacidad de captar e intimidar a los formuladores de políticas y a las autoridades reguladoras. Pueden dirigir el modo en que las reglamenta el Gobierno y, como ha puesto de manifiesto la última crisis, pueden obtener ayudas tras conducir a sus sistemas financieros a la recesión.

Cabría esperar que la crisis financiera mundial hubiese mermado el poder político y económico de las instituciones financieras. Es necesario entender las fuerzas sociales que impulsan el poder de las instituciones financieras para entender cómo han demostrado tanta capacidad de recuperación ante las crisis financieras y las protestas políticas populares. La revocación de programas sociales y subsidios y ayudas estatales para pensiones, seguros de enfermedad, prestaciones de desempleo, vivienda y otras necesidades impulsa el poder y la influencia de las finanzas. Los factores demográficos de muchos países desarrollados tienen grandes repercusiones en los mercados financieros internacionales. Sus poblaciones, que están envejeciendo, quieren asegurarse de que cuentan con inversiones suficientes para sus años de jubilación. Estas poblaciones también invierten en salud y otros productos aseguradores porque no pueden depender tanto del Estado. La mayoría de estas inversiones se hacen a través de inversores institucionales, que han presionado a grandes empresas para que concentren sus inversiones en rendimientos a corto plazo.

Como resultado, ha cambiado el enfoque que adoptan muchas de las mayores corporaciones globales hacia la inversión y el empleo. Los hechos apuntan a que, cada vez más, las economías con más orientación financiera han reducido sus niveles de inversión en la industria manufacturera. Los inversores institucionales pueden captar rentas y beneficios en los países en desarrollo sin tener que apoyar inversiones a largo plazo ni empleos dignos en sus países de origen. Además, las poblaciones que envejecen en los países desarrollados son políticamente importantes e influyentes, en especial durante los años de elecciones. Los formuladores de políticas de estos países suelen ser mayores y comparten los intereses de aquellos que apoyan a los inversores institucionales.

Vivimos en un mundo donde muchos gobiernos no aumentarán su gasto en seguridad social y servicios sociales. A medida que aumentan los problemas relativos a la deuda, el discurso es recortar el gasto fiscal, reducir más los servicios sociales y retrasar la edad de jubilación. Las instituciones financieras se han aprovechado de la incapacidad de los servicios sociales y de la inseguridad de las personas mayores en el pasado reciente. Los programas cada vez más extendidos para reducir el gasto fiscal impulsarán a más personas a buscar proveedores privados de servicios sociales y a invertir más en fondos de pensiones privados. Las finanzas, en particular los inversores institucionales, se aprovecharán de esta mayor inseguridad. El poder de los inversores institucionales emana de la asignación del capital que las personas pagan por los servicios sociales, inversiones para la jubilación y seguros contra riesgos. Su terreno de juego son los mercados financieros internacionales. Por consiguiente, no podemos esperar grandes cambios o reglamentación suficiente en estos mercados a menos que se corrijan las fuerzas sociales que impulsan el poder de las finanzas. El programa del movimiento sindical internacional debería, ahora más que nunca, invertir la marcha de los gobiernos hacia la reducción de los servicios sociales y las disposiciones sobre jubilación. Deben hacer frente a los programas que recortan el gasto social y aumentan la seguridad de los pobres.

Por último, debe lucharse para que no se comercialice con la educación, la salud y otros servicios sociales, así como con las pensiones, y por que el Estado sea el principal proveedor de estos servicios. Los sindicatos internacionales deberían actuar para contrarrestar el poder de las instituciones financieras de captar e intimidar a los formuladores de políticas económicas y autoridades reguladoras. Deben convencer a sus miembros para que utilicen su poder como consumidores de servicios sociales privados, seguros de enfermedad y pólizas de jubilación para luchar contra el comportamiento destructivo de los inversores institucionales que venden estos servicios.

Los Estados que cuenten con un programa de desarrollo económico deberían instaurar medidas para contener el poder de estas instituciones en las economías de sus países y proteger a estas últimas de las especulaciones, turbulencias, crisis y contagios del resto del mundo. Los sindicatos deben unirse a otros movimientos sociales para combatir los cambios en las políticas económicas y promover más programas de desarrollo. Como grupo político de representación, deben presionar mucho más para obtener reglamentaciones financieras más efectivas. A menos que podamos orquestar una campaña global contra el poder incontrolado de las finanzas, nos enfrentamos a la amenaza de más crisis

Debe lucharse para que no se comercialice con los servicios sociales y por que el Estado sea el principal proveedor de estos servicios

financieras en el futuro. Si lo acontecido en estos últimos decenios nos da indicios de lo que podemos esperar en el futuro, pueden producirse más crisis periódicas y cada vez más graves. Los trabajadores y los pobres cargarán desproporcionadamente con las dificultades que éstas acarreen.

Seeraj Mohamed es director del Corporate Strategy and Industrial Development Research Programme (CSID) del School of Economics and Business Sciences de la Universidad de Witwatersrand, donde enseña en el Departamento de Economía y en el programa del máster de la Universidad Global del Trabajo. Trabaja en la investigación, análisis y desarrollo de política económica. Ha trabajado en el ámbito de la política económica e industrial durante dos decenios.